



**GUADALAJARA, JALISCO, 22 VEINTIDÓS DE ENERO DEL AÑO
2020 DOS MIL VEINTE.**

V I S T O para resolver en sentencia definitiva el Juicio Administrativo radicado con número de expediente anotado rubro, promovido por [REDACTED] en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA y DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE GUADALAJARA, TODAS DEL ESTADO DE JALISCO.**

R E S U L T A N D O

1.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 14 catorce de enero del año 2019 dos mil diecinueve, [REDACTED], promovió juicio administrativo, atento a los motivos y consideraciones legales que del mismo se desprenden.

2.- En proveído de fecha 16 dieciséis de enero del año 2019 dos mil diecinueve, se admitió la demanda de referencia, teniéndose como Autoridades demandadas a las ya citadas, y como actos administrativos impugnados, los señalados en el escrito inicial de demanda, consistentes en:

- Cédulas de Notificación de Infracción folios **293543585 y 305690031**, emitidos por la Secretaría del Transporte;
- Cédula de Notificación de Infracción con folio **6643807**, emitidos por la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco.
- El cobro de derecho por los servicios del Refrendo Anual de Placas Vehiculares de los años 2017 dos mil diecisiete y 2018 dos mil dieciocho, y sus accesorios

De igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas que se encontraron ajustadas a derecho, teniéndose por desahogadas aquellas que su naturaleza lo permitió, requiriendo a las demandadas por los actos reclamados. De lo anterior, se ordenó correr traslado a las autoridades con las copias simples de la demanda inicial y documentos anexos, apercibidas que de no producir contestación en un término de 10 diez días se tendrían por ciertos los hechos que no fueran contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

3.- Por acuerdo de fecha 16 dieciséis de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, se tuvo a la Secretaría del Transporte del Estado allanándose a las pretensiones de la demandante, por lo que se abrió el periodo de alegatos.

4.- En proveído del 8 ocho de julio del año 2019 dos mil diecinueve, se regularizó el procedimiento ordenando emplazar a la Secretaria de la Hacienda Pública, misma que, por acuerdo de fecha 30 treinta de octubre siguiente, se tuvo contestando la demanda, oponiendo excepciones, defensas y causal de



improcedencia, de igual forma, se admitieron las pruebas ofrecidas. De lo anterior, se ordenó dar vista a su contraria para que ampliara su demanda.

4.- En actuación del 16 dieciséis de enero del año 2020 dos mil veinte, toda vez que la actora no amplió su demanda y, al no quedar pruebas pendientes por desahogar, se concedió el término de 3 tres días para que las partes presentaran alegatos, surtiendo efectos de citación para el dictado de la sentencia definitiva.

C O N S I D E R A N D O

I.- Esta Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, resulta competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 65 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los numerales 4 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad, y los arábigos 1º, 4, 72, 73 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Jalisco.

II.- La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentran acreditados con las constancias que obran a foja 13 trece y 35 treinta y cinco del Expediente en que se actúa, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido en los artículos 329, fracción VI, 336, 337, 399 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 de este último ordenamiento legal.

III.- Previo a resolver el fondo del asunto que se plantea, procede examinar la causal de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer las autoridades demandadas, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en el Juicio Administrativo, al tenor de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 30 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como la Jurisprudencia II.1o. J/5, consultable en la página 95 noventa y cinco, Tomo VII, mayo de 1991 mil novecientos noventa y uno, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que reza: *“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia”*.

La Secretaría de Hacienda Pública del Estado, señala que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IX del numeral 29 de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 1 de la misma legislación, a virtud que *el pago del refrendo se encuentra previsto en una norma de carácter general emitida por el Congreso del Estado, por lo que no es impugnabile ante este Tribunal.*

La causal de improcedencia en análisis **se desestima**, toda vez que la misma encierran cuestiones que guardan relación con el fondo de la litis, las cuales serán tratadas por este juzgador en el Considerando siguiente, por lo que no es dable,



por técnica jurídica en el pronunciamiento de la presente sentencia, el avocarse al estudio de los argumentos contenidos en la causal de mérito, cuando los mismos serán tratados con posterioridad. Cobra aplicación al presente criterio, la Jurisprudencia P./J. 135/2001, localizable en la página 5 cinco, Tomo XV, enero de 2002 dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.”

No obstante, este Juzgador advierte de oficio la actualización de la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción IV del numeral 29 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, tomando en consideración que la autoridad demandada notificó el crédito fiscal generado por concepto de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma del ejercicio fiscal 2017 dos mil diecisiete, multas, recargos y gastos de ejecución al accionante, mediante el Requerimiento con número de folio **M417004128091**, así como el Acta Circunstanciada de Notificación y su Citatorio con fechas 8 ocho y 7 siete de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, respectivamente, documentos que obran a fojas 30 treinta a 32 treinta y dos de autos y merecen valor probatorio pleno atento a lo dispuesto por los numerales 329, fracción VI y 399 del Código de Procedimientos civiles del Estado, aplicado supletoriamente, mismos que no fueron combatidos por la promovente, pese haberle otorgado término para que ampliara su demanda, por lo que a la fecha de presentación del escrito inicial, el día 14 catorce de enero del año 2019 dos mil diecinueve, había transcurrido en exceso el término de 30 treinta días establecido en el artículo 31 de la Ley de la Materia, consintiendo tácitamente el crédito fiscal notificado.

De ahí que, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 30, fracción I y último párrafo y 74, fracción III, **se decreta el sobreseimiento** del presente juicio, únicamente por lo que ve al crédito fiscal determinado por concepto del derecho por Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma respecto al año 2017 dos mil diecisiete, recargos, actualizaciones y multas, al resultar extemporánea la presentación de la demanda.

IV. Resuelto lo anterior, en términos del ordinal 73 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede analizar la litis planteada, para lo cual, atento a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 50/2010, donde prevaleció la Jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, visible en la página 830 ochocientos treinta, Tomo XXXI, mayo de 2010 dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro ***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”*** los conceptos expresados por las partes no se transcriben de manera literal, al estimar que con ello no se causa perjuicio a quienes intervienen



en el juicio; no obstante, se precisará en la presente resolución los puntos sujetos a debate derivados de la demanda, contestación y en su caso, la respectiva ampliación.

V.- Primeramente, en lo que respecta a las Cédulas de Notificación de Infracción emitidas por la Secretaria del Transporte del Estado de Jalisco, tomando en cuenta la manifestación de allanamiento por parte de la misma, respecto de la pretensión del accionante, se estima innecesario entrar al estudio de la Litis planteada acorde a lo dispuesto por el ordinal 42 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, mismo que para una mayor convicción se transcribe:

“...Artículo 42. Admitida la demanda en definitiva se correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro del término de diez días. El plazo para contestar la ampliación de la demanda también será de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que la admita. Si no se produce la contestación en tiempo, o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que no hubieren sido contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

(...)

En la contestación de la demanda y hasta antes del cierre de la instrucción, el demandado podrá allanarse a las pretensiones del demandante si se tratare de la autoridad, el magistrado podrá ordenar de inmediato la revocación del acto origen de la demanda o la expedición del acto que subsane la omisión, según sea el caso...”

Determinado lo anterior, este Juzgador declara procedente la pretensión del actor, toda vez que las enjuiciadas se allanaron a la misma, lo que implica su conformidad con lo pretendido y a la vez su renuncia expresa a su derecho de defensa, en consecuencia se revocan los actos impugnados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio **293543585 y 305690031**, emitidas por la Secretaria del Transporte del Estado de Jalisco.

VI.- Por lo que ve a la diversa Cédula de Notificación de Infracción emitida por la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, que se impugna, atento a lo dispuesto por el numeral 72 de la Ley de la Materia, se analizan en primer término las causas de anulación que lleven a declarar la nulidad lisa y llana del acto reclamado, para lo cual, la parte actora alega en su segundo concepto que *los actos impugnados carecen de fundamentación y motivación, siendo violatorios del numeral 16 constitucional.*

Visto lo argumentado por la accionante, se determina que le asiste la razón, atento a los siguientes razonamientos legales.

Tomando en consideración que la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara no exhibió el acto que se le imputa y, analizado el argumento vertido por el actor, se determina que le asiste la razón, a virtud que mediante acuerdo de fecha 16 dieciséis de enero del año 2020 dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento a la autoridad respecto a tener por ciertos los hechos que la accionante pretendía acreditar con la exhibición del acto reclamado consistente en la Cédula de Notificación de Infracción con número de folio **6643807**, emitido



por la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara, Jalisco, respectivamente, -la cual dicha demandada omitió acompañar al juicio que nos ocupa, pese haber sido legalmente requeridas por esta Sala Unitaria- por cuanto a la ilegalidad de la misma. En consecuencia, al no demostrar el mandamiento por escrito, debidamente fundado y motivado, para sancionar al promovente, se viola en su perjuicio las garantías previstas en el artículo 16 Constitucional, en relación con las fracciones I y III del numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, pues, tomando en consideración la manifestación de la parte actora que nunca le fueron notificados dichos actos administrativos, desconociendo su contenido, resultaba obligación para las autoridades, al contestar la demanda, demostrar su existencia mediante la exhibición de los citados documentos públicos, conforme al segundo párrafo del numeral 36 de la Ley de Justicia Administrativa, atento a la solicitud previa presentada por el demandante, a efecto que éste estuviera en condiciones de combatirlos mediante ampliación de demanda y, al no hacerlo de esa manera, procede declarar la nulidad lisa y llana de los actos reclamados, ello con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 74, en relación con la fracción II del diverso ordinal 75, ambos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al emitirse en contravención a las disposiciones legales aplicables.

Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011, visible a fojas 2645 dos mil seiscientos cuarenta y cinco del Libro III, Tomo 4 cuatro, diciembre de 2011 dos mil once, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA. *Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

Contradicción de tesis 169/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno, Décimo Quinto y Décimo Séptimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito. 13 de julio de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez.”

VII.- Con respecto al pago de derechos por refrendo anual de placas vehiculares del ejercicio fiscal del año 2018 dos mil dieciocho y sus accesorios, al haberse decretado el sobreseimiento respecto del año 2017 dos mil diecisiete, en relación al vehículo con número de placas [REDACTED] emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la parte actora argumenta en el sexto



concepto de impugnación que *el cobro en mención, resulta ilegal ya que fue emitido en contravención de los principios de legalidad de las contribuciones dispuesto por el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que resulta inconcusa la ilegalidad del artículo 23 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 2018 dos mil dieciocho, al prever distintas tarifas, siendo el mismo servicio prestado.*

Por su parte la autoridad demandada, señala que *contrario a lo expuesto por la parte actora, pues la existencia de diversas cuotas establecidas por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, atiende a que son circunstancias distintas e implica despliegue técnico diverso para un automóvil, motocicleta y placas de demostración, por lo que es completamente legal y procedente el cobro de una cuota distinta para cada supuesto.*

Analizados los argumentos expuestos por las partes, se determina que le asiste la razón a la actora, en razón que el numeral 31 Constitucional, en su fracción IV establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, por su parte, el artículo 44 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y el numeral 2 del Reglamento del Registro Estatal de Movilidad y Transporte, establecen lo siguiente:

*“Artículo 44. Todo vehículo para transitar u ocupar la vía pública, deberá contar con los requisitos y condiciones requeridas de acuerdo a lo dispuesto por esta ley y su reglamento; para ello **deberán estar inscritos en el registro estatal, en ese caso, deberán portar los elementos de identificación conforme a su tipo y características; tales como placas, tarjeta de circulación, holograma de verificación vehicular** y constancia o póliza de seguro vial vigentes que garantice los daños y perjuicios contra terceros.*

Dichos documentos deberán permanecer inalterables e inmodificables, así como evitar colocar cualquier medio que impida su correcta visualización, según sea el caso.

En el caso de los vehículos de transporte público, en sus distintas modalidades, además de los documentos antes señalados, las unidades deberán portar los rótulos y colores que los identifiquen como prestadores del servicio de que se trate.

Todo conductor deberá portar la licencia o permiso para conducir vigente, de acuerdo al tipo de vehículo de que se trate y conforme a la clasificación establecida en la presente ley y su reglamento”.

*“Artículo 2. **El Registro Estatal de Movilidad y Transporte, es la base de datos del Ejecutivo del Estado, en donde se administra, reúne y procesa la información relativa a los registros e inscripciones de licencias de conducir, permisos, concesiones, autorizaciones, registros de contratos de subrogación, registros de vehículos del servicio particular y del servicio público del Estado de Jalisco y las modificaciones que sufran y los derechos legalmente constituidos sobre las mismas.***

De igual forma es responsable del registro de las cédulas de notificación de infracción y foto infracciones instauradas tanto por el personal de la Policía Vial de la Fiscalía, por los equipos o sistemas electrónicos, así como en las que en su caso, asuma por la coordinación que celebren con los ayuntamientos, actas de alcoholimetría, actas de accidente vial y las demás que por su importancia o trascendencia le instruya el Secretario.

El Registro Estatal de Movilidad y Transporte, forma parte integrante de la estructura orgánica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.”



Del primer precepto transcrito, se advierten los requisitos con los cuales debe contar todo vehículo automotor para ocupar y transitar en la vía pública, entre los cuales, el estar inscrito en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte.

Por su parte, del segundo artículo citado se desprende, que el registro estatal forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, y tiene como función administrar, reunir y procesar la información relativa a los registros e inscripciones de licencias de conducir, permisos, concesiones, autorizaciones, registros de contratos de subrogación, registros de vehículos del servicio particular y del servicio público del Estado de Jalisco, así como inscripción de las modificaciones en la información aludida y los derechos constituidos sobre ellas.

Ahora bien, la norma que se estima violatoria, esto es, el numeral 23 fracción III, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2018 dos mil dieciocho, establece los montos respecto del pago de derechos por el servicio de refrendo anual de placas vehiculares, los cuales son diferentes por cuanto a las motocicletas y los automóviles, camiones, camionetas tractores automotores y remolques, siendo más elevado el pago de éstos últimos.

En ese tenor, se concluye que la actividad realizada por el Estado a través del Registro Estatal de Movilidad y Transporte consiste en la gestión y administración de la información, entre otros, de los vehículos automotores de uso particular registrados ante esa institución, por tanto, al establecer un costo diverso para el refrendo de automóviles, motocicletas y placas de demostración, respecto a un mismo servicio prestado, como lo es la gestión y administración de los datos de vehículos automotores, así como el otorgamiento de la tarjeta de circulación y holograma, que hacen constar la convalidación del registro, violenta el principio de equidad tributaria, toda vez que el costo erogado por el Estado para proporcionar el servicio descrito es el mismo, puesto que no se advierte que el despliegue sea distinto para cada uno de los diversos tipos de vehículos.

Cobra aplicación al presente criterio, lo determinado por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la Contradicción de Tesis 20/2017, dando lugar a la Jurisprudencia PC.III.A. J/41 A, visible en la página 1811 del Libro 54, Tomo II, mayo de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que resulta de aplicación obligatoria para esta Sala Unitaria conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, donde concluye con la inconstitucionalidad de las normas que son de idéntico contenido a la que hoy se reclama, al resultar violatorias a los principios consagrados en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, a saber:

“DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Los preceptos



legales indicados, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos, sin brindar elementos sólidos que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por todos sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para todos los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales. PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.”

En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción II y 75 III de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se declara la nulidad del cobro de Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto del ejercicio fiscal del año 2018 dos mil dieciocho, así como sus respectivas multas, actualizaciones, recargos y gastos de ejecución, quedando a salvo las facultades de la autoridad fiscal, para que, de estimarlo, realice el cobro únicamente de la contribución, debiendo en todo caso aplicar la cuota mínima prevista para las motocicletas en el numeral 23 fracción III, inciso b), de la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio fiscal del año 2018 dos mil dieciocho.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, fracción IV, 30, fracción I y último párrafo, 42, 72, 73, 74, fracciones II y III y 75, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se resuelve de conformidad a las siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicio administrativo, únicamente por lo que ve al cobro del Derecho de Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto al año 2017 dos mil diecisiete y sus accesorios, al resultar extemporánea la presentación de la demanda, atento a los motivos y consideraciones legales que se desprenden del Considerado III de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se revocan los actos impugnados consistentes en las Cédulas de Notificación de Infracción con números de folio **293543585** y **305690031** y sus accesorios, emitidas por la Secretaria del Transporte del Estado de Jalisco, por allanamiento del Secretario del Transporte del Estado, a las pretensiones de la parte actora, como se establece en el Considerando V del presente fallo.



TERCERO.- La parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción, en tanto que las autoridades demandadas no justificaron sus excepciones y defensas, en consecuencia;

CUARTO.- Se declara la nulidad lisa y llana de la Cédula de Notificación de Infracción folio **6643807**, emitida por la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, Jalisco, así como del crédito fiscal por concepto de Refrendo Anual de Placas Vehiculares respecto del ejercicio fiscal del año 2018 dos mil dieciocho y sus accesorios, emitidos por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, al dictarse en contravención a las disposiciones legales aplicables, atento a los motivos y fundamentos expuestos en los Considerandos VI y VII de la presente resolución.

QUINTO.- Se ordena a las demandadas la cancelación de las cédulas de notificación de infracción y crédito fiscal, descritos en los resolutivos Segundo y Cuarto del presente fallo, emitiendo el acuerdo correspondiente y realizando las anotaciones conducentes en el sistema informático con el que cuentan las autoridades demandadas.

En virtud de que la presente sentencia se dicta dentro del término de ley establecido en el artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa, y de conformidad con el artículo 109 del enjuiciamiento civil local aplicado supletoriamente en relación con el artículo 2 de la Ley de Justicia Administrativa, con la publicación que de esta se haga en el boletín judicial quedan debida y legalmente enteradas las partes del presente juicio.

**NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN JUDICIAL A LA PARTE ACTORA
Y POR OFICIO A LA PARTE DEMANDADA.**

Así lo resolvió y firma el Presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Magistrado Laurentino López Villaseñor, actuando ante la Secretario Patricia Ontiveros Cortés, que autoriza y da fe. -----

MAGISTRADO PRESIDENTE

LAURENTINO LÓPEZ VILLASEÑOR

SECRETARIO

PATRICIA ONTIVEROS CORTÉS



La Segunda Sala, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán de observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.-----